

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
DE FACATATIVÁ (CUNDINAMARCA)**

**Septiembre 5 de 2022:** Al despacho el proceso contra **WILSON JAVIER RINCON COCA** identificado con C.C. 7.316.218, informando que conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto interlocutorio No. 0406 del 3 de agosto de 2022, se emite por parte del Asistente Social el Informe de Asistencia Social en fecha 22 de agosto de 2022, para resolver la solicitud de Prisión Domiciliaria – art. 38G del C.P. -, invocado por el condenado. Sírvasse proveer.

**BLANCA CECILIA GUTIERREZ**  
SECRETARIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA**

**Agosto veinticinco (25) de dos mil veintidós (2022)**

**AUTO INTERLOCUTORIO No. 0457**

Número único:	110016000049201114460
Condenado:	WILSON JAVIER RINCON COCA
Delito:	FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO EN CONCURSO CON COHECHO POR DAR U OFRECER
Sitio de Reclusión:	CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA
Decisión:	CONCEDE PRISIÓN DOMICILIARIA ART. 38G CP

**1.- OBJETO DE LA DECISIÓN**

Procede el Despacho a resolver sobre la solicitud de prisión domiciliaria artículo 38G del C.P., invocada por el condenado **WILSON JAVIER RINCON COCA** identificado con C.C. 7.316.218, quien se encuentra recluso en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD- EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA

**2.- ASUNTO**

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las norma de la Ley vigente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

### 3. ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos desde el mes de diciembre de 2010, el Juzgado 38 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá D.C., mediante sentencia del 28 de febrero de 2018 **CONDENÓ a WILSON JAVIER RINCON COCA** a la pena de **SESENTA Y CUATRO (64) MESES DE PRISIÓN y MULTA DE SETENTA (70) SMLMV** y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ochenta y cinco (85) meses, como autor responsable del delito de **FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO EN CONCURSO CON COHECHO POR DAR U OFRECER (artículo 287 y 407 del C.P.)**. ABSOLVIÓ al infractor por el cargo de Fraude Procesal y DECRETÓ LA PRECLUSIÓN por el delito de asociación para cometer un delito contra la administración pública. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, a través de decisión del 16 de mayo de 2018, NEGÓ la nulidad solicitada por la defensa técnica y CONFIRMÓ el fallo condenatorio.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante providencia del 5 de diciembre de 2018 INADMITIÓ demanda de casación.

El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 5 de diciembre de 2018.

El homólogo 24 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso mediante auto del 27 de marzo de 2019 y dispuso librar orden de captura<sup>1</sup>, por auto del 23 de octubre del 23 de 2019 ordenó reiterar la orden de captura<sup>2</sup>.

A través de auto del 13 de agosto de 2020, el homólogo 24 de Bogotá legalizó la captura del condenado y libró boleta de encarcelación No. 034<sup>3</sup> ante el señor director del Complejo Penitenciario y Carcelario Metropolitano de Bogotá – COMEB – La Picota.

**WILSON JAVIER RINCON COCA** ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto en dos oportunidades: i) **del 2 de agosto al 21 de noviembre de 2011** y; ii) **desde el 12 de agosto de 2020**.

Por auto de fecha 7 de octubre de 2020 emitido por el homólogo 24 de Bogotá, resolvió abstenerse de efectuar un nuevo análisis, respecto a la concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria y negó la solicitud de amortización de la pena de multa por trabajo.

Este Juzgado avocó conocimiento del proceso, mediante auto de sustanciación No. 0938 del 3 de noviembre de 2021 y mediante auto interlocutorio No. 0249 del 4 de mayo de 2022 aprobó la concesión del beneficio administrativo de hasta 72 horas al sentenciado.

Previo a resolver la solicitud de prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., invocada por el condenado, se ordenó por auto de interlocutorio No. 0406 del 3 de agosto de 2022, al Asistente Social de este Juzgado realizar por el medio más expedito y determinar entre otras cosas en qué condiciones conviviría el sentenciado, la dirección y el entorno social, a fin de verificar la dirección suministrada **Calle 4 C # 14B-48 primer piso, barrio El Bosque en el municipio de Facatativá** en donde reside la señora Liliana Marcela Pachón Guzmán, esposa del condenado, identificada con C.C. No. 1.031.125.792. Celular 3229117144, para el cumplimiento de la pena.

<sup>1</sup> Folio 125 – archivo 25 – expediente digitalizado.

<sup>2</sup> Folio 159 – archivo 25 – expediente digitalizado.

<sup>3</sup> Folio 170 – archivo 25 – expediente digitalizado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Igualmente, en la mencionada providencia este Juzgado NO RECONOCIÓ redención de pena con respecto al certificado TEE No. 18527246 (442 horas – trabajo), como quiera que se reconocieron dichas horas y lapsos de tiempo, a través del auto interlocutorio No. 0377 del 13 de julio de 2022, el cual fue notificado al correo electrónico ejeco@buzonejercito.mil.co el día 13 de julio de 2022 a las 15:44 horas.

Durante el curso del proceso este Juzgado ha reconocido a favor del infractor redención de pena en un total de 5 meses y 14.44 días.

En esta oportunidad ingresa al despacho con la documentación allegada por la dirección de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD- EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, para el estudio de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., y con el Informe de Visita Social emitido el 22 de agosto de 2022 por el Asistente Social de este Juzgado.

### 3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020<sup>4</sup> del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

<sup>4</sup> ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*<sup>5</sup>.

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

#### 4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

##### 4.1. COMPETENCIA

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud de prisión domiciliaria impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1º, 3º, y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD- EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007.

Conforme a la fecha de los hechos ocurridos **desde el mes de diciembre de 2010**, el sentenciado **WILSON JAVIER RINCON COCA** fue investigado y juzgado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (modificada por la Ley 1453 de 2011) y 906 de 2004.

##### 4.2. DE LA SOLICITUD

---

<sup>5</sup> CSJ RAD 794 (01-07-20)



Vista la documentación allegada, para la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38G del C.P., se adjunta la documentación en la cual se relaciona los datos de contacto del disfrute de la prisión domiciliaria en la Calle 4 C # 14B-48 primer piso, barrio El Bosque en el municipio de Facatativá en donde reside la señora Liliana Marcela Pachón Guzmán, esposa del condenado, identificada con C.C. No. 1.031.125.792. Celular 3229117144, quien rindió ante la Notaría 2ª del Círculo de Facatativá Cundinamarca el día 28 de junio de 2022, la DECLARACIÓN EXTRAPROCESO 1037, y manifestó acoger y recibir en el mencionado inmueble a su compañero **WILSON JAVIER RINCON COCA** bajo su cuidado y responsabilidad en caso de que se le conceda la detención domiciliaria.

Se adjunta: Cartilla Biográfica, Concepto favorable para prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, Certificado de calificación de conducta No. 8701814, Certificado TEE No. 18527246, Informe de visita domiciliaria, Solicitud visita domiciliaria, Solicitud autorización visita domiciliaria, Consentimiento informado para visita domiciliaria, Informe Visita Domiciliaria-Estudio de arraigo familiar, Solicitud de Trámites de sustitución de la pena por prisión domiciliaria, Declaración Extraproceso 1037 rendida por la señora Liliana Marcela Pachón Guzmán, Facturas de servicios públicos (agua y energía).

#### 4.3. DE LA EXCLUSIÓN DE SUBROGADOS PENALES.

##### 4.3.1 Sobre el Delito Endilgado y las exclusiones del art 68 A del C.P.

El legislador ha tratado de establecer un control y ajuste a los diferentes delitos que se han ido tipificando a través de los tiempos; cada día es más exigente la prioridad de buscar medios adecuados para evitar y contrarrestar los comportamientos criminales o divergentes que alteran la sociedad que forma un Estado.

Es así como el Estado busca la manera de rechazar esas acciones criminales con sustento en las leyes, fijando para ello penas. De ahí nace la política criminal, que es el conjunto de medidas de que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad y la criminalización, compitiendo fundamentalmente al legislador en cuanto debe plasmar en textos legales las soluciones que se deben considerar para contrarrestar los comportamientos desviados ya surgidos o próximos a aparecer<sup>6</sup>.

Siguiendo con la presente tesis, en lo que respecta al delito endilgado al aquí petente – **FALSEDADE MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO EN CONCURSO CON COHECHO POR DAR U OFRECER (artículo 287 y 407 del C.P.)**, – el legislador, en uso de sus atribuciones, ha limitado la concesión de beneficios penales –art 68 A de la Ley 1709 de 2014, así como el art 26 de la Ley 1121 de 2006, o como lo ha hecho con otros delitos como por ejemplo los consagrados en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, ajustando dichas medidas legislativas en delitos considerados particularmente como graves para la sociedad y de los cuales una vez promulgados, la Corte Constitucional en su función ha declarado su constitucionalidad (C-738 del 23 de julio de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

Es de resaltar la obligatoriedad del precedente Constitucional y las consecuencias de su desconocimiento por el suscrito Funcionario judicial, ello es contundente, como quiera que la misma Corte Constitucional en sentencia T-388 de mayo 28 de 2009, siendo M.P. Humberto Sierra P., ha sostenido:

*“Los jueces que contradigan fallos de Constitucionalidad o desconozcan jurisprudencia de las altas cortes en violación de preceptos constitucionales o de un acto administrativo en general, incurrir en prevaricato por acción.”*

<sup>6</sup> Curso de Criminología, 7ª edición, Universidad Externado de Colombia, Álvaro Orlando Pérez Pinzón y otro

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Pues bien, con la entrada en vigencia de la **Ley 1142 de 2007**, fue incorporado al Código Penal un **nuevo artículo (68A)** reglamentario de la exclusión de beneficios y subrogados penales para internos que se encontraran en una situación determinada, en aquel momento era *cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores*.

Posteriormente el artículo 68A incorporado al Código Penal por la Ley 1142 de 2007 fue objeto de modificación por el **artículo 28 de la Ley 1453 de 2011** que determinó que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

**“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.**

*<Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.*

**PARÁGRAFO.** *El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.*

La norma en mención –**artículo 68A del Código Penal**- volvió a ser objeto de modificación con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, mediante la cual fueron incorporados otros delitos como los delitos contra la administración pública a fin de ser excluidos de beneficios y/o subrogados penales.

**ARTÍCULO 68A.** *No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; (...)*

*“...Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.*

*Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos...”*

Finalmente, el **artículo 32 de la Ley 1709 de 2014** (Ley que entró en vigencia el 20 de enero de 2014) incorporó unas nuevas modificaciones al artículo 68A del Código Penal, aduciendo que el nuevo texto de la norma sería el siguiente:

**“ARTÍCULO 68A. EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS Y SUBROGADOS PENALES.** **No se concederán;** la suspensión condicional de la ejecución de la pena; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; **ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo,** salvo los beneficios por colaboración

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

*regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores.*

**Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos** contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; ...”

Recientemente se ha modificado con la Ley 1773 de 2016, y el inciso modificado por el artículo 6 de la Ley 1944 de 2018. Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el señor **WILSON JAVIER RINCON COCA** como **FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO EN CONCURSO CON COHECHO POR DAR U OFRECER (artículo 287 y 407 del C.P.)**, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1º de la mentada norma que no se aplicaría el artículo a la libertad condicional (art 64 CP), **NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38G del C.P.**, motivo por el cual este funcionario entrará a estudiar la petición invocada por el condenado de la prisión domiciliaria por el mencionado artículo.

**Sobre este punto señaló la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:**

*“...No obstante, dicha regla tiene su excepción, esto es la consignada en el parágrafo 1 del mismo artículo y según la cual “Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código.” Es decir, cuando la petición de prisión domiciliaria se invoque con fundamento en el artículo 38G penal, no es dable negarla con fundamento en las exclusiones consignadas en el artículo 68A del mismo estatuto, sino que deberá ceñirse a las condiciones y prohibiciones que para el mismo beneficio impone la propia norma...”<sup>7</sup>*

#### **4.4. SOBRE LA PRISIÓN DOMICILIARIA ART 38G del C.P.**

El Despacho debe iniciar su exposición advirtiendo que el día 20 de enero de 2014 se sancionó la Ley 1709 de 2014 *“Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”*, misma que empezó a regir desde el momento mismo de su promulgación. El artículo 5º de dicha disposición adicionó el artículo 7 A de la Ley 65 de 1993, en el sentido de señalar que el Juez que vigila el cumplimiento de la condena de oficio, a petición del recluso o de su apoderado judicial, deberá reconocer los mecanismos sustitutivos de la pena, en aquellos casos que se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos.

Al respecto señala la norma:

**“(...) Artículo 7 A. obligaciones especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad:** Los jueces de Penas y Medidas de Seguridad tiene el deber de vigilar las condiciones de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la sentencia condenatoria.

<sup>7</sup> CSJ RAD Radicado 45900 del 1 de febrero de 2017, M.P. Dr. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO



Los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad, de oficio o a petición de la persona privada de la libertad o su apoderado de la Defensoría Pública o de la procuraduría General de la Nación, también deberán reconocer los mecanismos alternativos o sustitutivos de la pena de prisión que resulten procedentes cuando verifiquen el cumplimiento de los respectivos requisitos. (...) ” (Subrayado fuera de texto).

La mentada Ley, a través de su artículo 28, adicionó el sustituto de la Prisión Domiciliaria en el sentido de agregar el artículo 38G al Código Penal (Ley 599 de 2000), el cual por sustracción de materia modifica el artículo 25 de la Ley 1453 de 2011. Dicha norma estatuye:

**“(...) Artículo 28. Adicionase un artículo 38G a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor: Artículo 38G.** La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38 B del presente Código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: Genocidio, contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido; uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso segundo del artículo 376 del presente código.(...)”

El mencionado artículo 38 G., **fue objeto de modificación recientemente el 30 de diciembre de 2019, por la ley 2014**, la cual a través de su artículo 4 agrego conductas punibles cometidas en contra de la Administración Publica, quedando así:

**Artículo 38G,** la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurren los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos del presente código: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2° del artículo 376; peculado por apropiación; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; cohecho por dar u ofrecer; interés indebido en la celebración de contratos; contrato sin cumplimientos de requisitos legales; acuerdos restrictivos de la competencia; tráfico de influencias de servidor público; enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio; soborno; soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; en los delitos que afecten el patrimonio del Estado.

**Parágrafo.** los particulares que hubieran participado en los delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer,



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

*interés indebido en la celebración de contrato, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción, falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal, amenaza a testigos, ocultamiento, alteración, destrucción material probatorio, no tendrán el beneficio de que trata este artículo.*

A su vez debe ser analizado en conjunto con lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 38 B (creado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014), que indica:

*“(…) **Artículo 23.** Adicionase un artículo 38B a la ley 599 de 2000, del siguiente tenor: **Artículo 38B. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria.** Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:*

*1. (...)*

*3. QUE SE DEMUESTRE EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL DEL CONDENADO*

*4. QUE SE GARANTICE MEDIANTE CAUCIÓN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:*

*A. No cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial:*

*B. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia;*

*C. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello;*

*D. Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (...)* **(Resalta fuera de texto)**

De igual forma, debe advertirse que el numeral 7º del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, obliga a este funcionario dar aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, por ende, se torna imperioso estudiar si el sentenciado cumple con los nuevos requisitos dispuestos para acceder al mecanismo sustituto de la prisión, y en caso afirmativo decretar el traslado a su lugar residencia previo cumplimiento de los requisitos dispuestos para gozar del sustituto.

Por último, se trae a colación el párrafo 1º del artículo 4º de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3º de la Ley 1709 de 2014 que como norma rectora señala lo siguiente:

*“(…) **Parágrafo 1º.** En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa (...)”* (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado párrafo, no resulta plausible negar los subrogados en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al mecanismo sustituto.

#### **4.5. DEL CUMPLIMIENTO DE LA MITAD DE LA CONDENA.**

De la pena impuesta al condenado, esto es, **64 meses de prisión**, según la norma en cita el requisito objetivo corresponde al cumplimiento de la mitad de la condena, en éste caso corresponden a **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISIÓN**.

**WILSON JAVIER RINCON COCA** conforme a la información que se tiene en las diligencias ha estado privado de la libertad dentro de las presentes diligencias en dos oportunidades: i) **del 2 de agosto al 21 de noviembre de 2011** y; ii) **desde el 12 de agosto de 2020** hasta la fecha, lo que implica que a hoy lleva **856 días**, que equivalen a **28 meses y 26 días**

Adicional a la pena física cumplida, el condenado cuenta con un total de redenciones de pena de **5 meses y 14.44 días**, reconocidas así:

- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0626 del 10 de diciembre de 2021, reconoce 2 meses y 20.5 días.
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0048 del 26 de enero de 2022, reconoce 24.51 días
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0245 del 29 de abril de 2022, reconoce 1 mes y 1.81 días.
- JEPMS Facatativá, auto interlocutorio No. 0377 del 13 de julio de 2022, reconoce 27.62 días

Por lo anterior, tenemos entonces que el interno **WILSON JAVIER RINCON COCA** acumula un total de:

Redenciones de pena reconocidas	<b>5 meses y 14.44 días</b>
Tiempo de privación física	<b>28 meses y 26 días</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34 meses y 10.44 días</b>

**Vemos que el infractor cumple con el factor objetivo.**

En cuanto a los presupuestos de los numerales 3º y 4º del artículo 38 B, se tiene:

**4.5.1. ARRAIGO FAMILIAR:**

Ontológicamente el arraigo familiar y social en materia penal se ha determinado como requisito para establecer certeza de la comparecencia del investigado a las diferentes etapas del proceso, que en caso de ser convocado y éste no acuda, se contará con información que pueda ayudar a su ubicación, en aquellos casos donde sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional.

Mismo caso ocurre con el instituto del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, donde el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ejerzan un control material del cumplimiento de la condena.

El arraigo familiar debe entenderse como la coexistencia de personas que pertenezcan al núcleo familiar del procesado o condenado con éste, pero no necesariamente dicho núcleo debe revestir especiales condiciones, simplemente existir, que el sentenciado cohabite con individuos que pertenezcan a su familia, sin distinción de líneas o grados de sangre.

De otra parte, arraigo social se debe entender como el conjunto de esas condiciones en que un individuo ha asentado su vida en relación a un lugar específico, desarrollando sus actividades diarias, como trabajo, estudio, vivienda o simplemente la relación con un grupo determinado; en síntesis, el arraigo social está cimentado en la correlación de una persona con otros integrantes de una comunidad que comparte un espacio específico.

Al efecto, se tiene que el infractor aporta el memorial suscrito por el condenado y el Informe de Visita Domiciliaria – Estudio de Arraigo Familiar emitido por la Trabajadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Social JEIMMY CAROLINA QUITIAN GERENA y los recibos de servicios públicos (energía y agua), en los que se relaciona la dirección del domicilio ubicado en la **Calle 4 C # 14B-48 El Bosque Facatativá Cundinamarca.**

En dicho informe se emite lo siguiente “(...) **CONCEPTO**... “por lo evidenciado y lo relatado por la señora Liliana Pachón se encuentran rasgos de una familia que brinda soporte emocional y económico al Militar Privado de la Libertad así mismo, desea construir un proyecto de vida relacionado con el fortalecimiento de los vínculos familiares apoyando actualmente la situación que vivencia el hijo del señor Rincón Coca al conocer que la progenitora del joven se fue del país.

*Es de rescatar las acciones que el señor Rincón Coca desea establecer con la posible sustitución de medida ya que según lo manifiesta su deseo es traer a vivir a su hijo con él y con la señora Liliana Pachón y así dar continuidad a su rol paterno y acompañar a su hijo en esta etapa del ciclo vital evitando que tome caminos incorrectos o decisiones no asertivas.*

*Centro de la dinámica familiar se encuentra una jerarquización, principios y valores que permiten una distribución de roles al interior de la familia. Tomando como referencia lo expuesto, el arraigo familiar se percibe fuerte, así como la red familiar de apoyo, siendo este un factor protector para la reinserción de interno a su familia y a la sociedad, respecto a la relación establecida entre la familia y su entorno social, se percibe estable y sólida sin reportar novedades (...).”*

En la Declaración Extraproceso 1037 de fecha 28 de junio de 2022, rendida ante la Notaría 2ª del Círculo de Facatativá Cundinamarca, por la señora **LILIANA MARCELA PACHON GUZMAN** identificada con C.C. No. 1.031.125.792, declaró que acoge y recibe en su vivienda ubicada en la CLL 4 C 14 b PISO I BARRIO EL BOSQUE DE FACATATIVA a su compañero de nombre **WILSON JAVIER RINCON COCA**, identificado con C.C. No. 7316218, quien estará bajo su cuidado y responsabilidad, en caso de que se le conceda detención domiciliaria.

Ahora bien, conforme a lo ordenado por este Juzgado en auto de sustanciación No. 0406 del 3 de agosto de 2022, se emite por parte del Asistente Social del Juzgado el Informe de Valoración Asistencia Social de fecha 22 de agosto de 2022 por el cual se indicó:

“(...) **CONCEPTO**

*El señor condenado cuenta con un grupo familiar conformado por su cónyuge, padres, hermanos e hijos, personas quienes le han brindado apoyo y colaboración tanto ahora estando privado de la libertad como en otros momentos de la vida.*

*El señor condenado pertenece a una familia que se observa aunada y estable en el tiempo y que al parecer funciona de manera positiva.*

*La familia del señor condenado está asentada en Bogotá, pero aquel residiría en Facatativá pues es el lugar donde está establecida su compañera permanente.*

*Respecto al lugar donde el condenado desea ser autorizado para residir, se cuenta con un espacio de vivienda adecuado y buenas condiciones de seguridad.*

*Por parte de la familia de aquel, se expresa solidaridad económica y existencial hacia WILSON JAVIER RINCÓN COCA, situación que implica contar con vínculos afectivos y redes de apoyo social que favorecen su reinserción social y posterior culminación del proceso de resocialización al que fuera sometido. (...).”*



Igualmente, se tiene que no se han reportado por parte de las directivas de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD- EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, quejas reportes de novedades de fugas, ni transgresiones que haya cometido el interno durante su reclusión, por lo que se emite la Resolución No. **091** del 25 de julio de 2022 por la cual el señor Director de la Cárcel y Penitenciaría y el Consejo de Disciplina “**CPAMS EJECO**” resuelve: “(...) PRIMERO: Otorgar **RESOLUCIÓN FAVORABLE**, al MPL **RINCON COCA WILSON JAVIER** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.316.218 NUI 1111973, para que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, considere de acuerdo a sus facultades legales si le otorga o no la Prisión Domiciliaria como Sustitutiva de la Prisión, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo (...)”.

Y todo esto en razón a que el arraigo familiar y social juega un papel fundamental para que el operador judicial que en conjunto con las diferentes entidades como el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, deberán ejercer un control material del cumplimiento de la condena, pues así lo ha determinado la Ley a través del artículo 29 A de la Ley 65 de 1993 el cual textualmente reza:

**ARTÍCULO 29A. EJECUCIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA.** <Artículo adicionado por el artículo 8 del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente:> Ejecutoriada la sentencia que impone la pena de prisión y dispuesta su sustitución por prisión domiciliaria por el juez competente, este enviará copia de la misma al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, quien señalará, dentro de su jurisdicción, el establecimiento de reclusión que se encargará de la vigilancia del penado y adoptará entre otras las siguientes medidas:

1. Visitas aleatorias de control a la residencia del penado.
2. Uso de medios de comunicación como llamadas telefónicas.
3. Testimonio de vecinos y allegados.
4. Labores de inteligencia.

*Durante el cumplimiento de la pena el condenado podrá adelantar las labores dirigidas a la integración social que se coordinen con el establecimiento de reclusión a cuyo cargo se encuentran y tendrá derecho a la redención de la pena en los términos establecidos por la presente ley.*

*En caso de salida de la residencia o morada, sin autorización judicial, desarrollo de actividades delictivas o incumplimiento de las obligaciones inherentes a esta pena, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, dará inmediato aviso al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para efectos de su revocatoria.*

#### **4.5.2. La concesión de este mecanismo será posible si no está incurso en algunos de los delitos relacionados en dicho articulado.**

Al verificar este requisito, se tiene que conforme a la sanción impuesta por el fallador y la relación del artículo para la época de los hechos no aparecen dentro del mismo el delito endilgado al condenado, esto es **FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO EN CONCURSO CON COHECHO POR DAR U OFRECER (artículo 287 y 407 del C.P.)**

El artículo analizado señala que quienes hayan sido condenados por los delitos allí mencionados les serán negados la concesión del sustituto penal. Empero, si no está inmerso en alguna de las causales de improcedencia, el juez solo deberá analizar que cumpla con los demás presupuestos legales. En efecto en aquella calenda una vez creado el artículo 38 G del C.P. en la relación de los tipos penales excluidos para su concesión no aparecen los delitos endilgados al aquí condenado, cobijándolo el principio de favorabilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

*“ARTÍCULO 38G. <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del condenado cuando haya cumplido la mitad de la condena y concurran los presupuestos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 38B del presente código, excepto en los casos en que el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima o en aquellos eventos en que fue sentenciado por alguno de los siguientes delitos: genocidio; contra el derecho internacional humanitario; desaparición forzada; secuestro extorsivo; tortura; desplazamiento forzado; tráfico de menores; uso de menores de edad para la comisión de delitos; tráfico de migrantes; trata de personas; delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales; extorsión; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; terrorismo; usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas; financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada; administración de recursos con actividades terroristas y de delincuencia organizada; financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, salvo los contemplados en el artículo 375 y el inciso 2o del artículo 376 del presente código.”*

**4.5.3. Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia.**

Dentro de la actuación allegada no aparece que se iniciara incidente de reparación de parte de las víctimas, motivo por el cual cumple con este requisito.

## 5. CONCLUSIÓN

En atención a lo dispuesto, se observan cumplidos todos los presupuestos contenidos en el artículo 38 G adicionado por la Ley 1709 de 2014, para que continúe purgando su pena en el lugar del domicilio, esto es, en la **Calle 4 C No. 14B-48 Piso 1 barrio El Bosque en Cundinamarca. Celular 3229117144.**

No obstante, si la dirección de residencia de sus familiares varió recientemente y como consecuencia el sentenciado deba cumplir la privación de la libertad en lugar distinto al señalado, deberá informarse inmediatamente a este Juzgado.

Para hacer efectiva esta sustitución, el condenado deberá suscribir diligencia de compromiso en los términos establecidos en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y deberá constituir caución prendaria en el equivalente a **DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, en atención a sus condiciones socioeconómicas recopiladas en el decurso procesal, en las que se estableció que **WILSON JAVIER RINCON COCA** carece de recursos económicos dado al periodo de tiempo que permaneció privado de la libertad, se infiere entonces que no se encuentra en capacidad de sufragar sumas mayores a la antes establecida. Además, teniendo en cuenta el amplio periodo que permanecerá privado de la libertad, se advierte que se impone esta cantidad como justa para garantizar las obligaciones que la concesión del sustituto conllevan. Dicha suma puede ser cancelada en dinero en efectivo a través de título judicial, según lo dispone el artículo 369 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).

Constituida la caución y suscrita la diligencia de compromiso se dispondrá que el Instituto penitenciario y carcelario donde actualmente se encuentra recluso proceda al traslado a su domicilio, bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

Teniendo en cuenta que el sentenciado se encuentra descontando pena en la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD- EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, se ordena por secretaría **COMISIONAR** a dicha Dirección, con el fin de notificar personalmente la presente decisión al sentenciado.

Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Calle 4 C No. 14B-48 Piso 1 barrio El Bosque en Cundinamarca. Celular 3229117144, a favor de WILSON JAVIER RINCON COCA.**

### 5.1. Sobre la Competencia

Debido a que el condenado va a continuar purgando pena bajo el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria en la ciudad de Facatativá Cundinamarca, por la Secretaría del juzgado una vez quede ejecutoriado el presente auto, **PROCEDASE** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

## 6. OTRAS CONSIDERACIONES

### 6.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

**“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS.** Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 5.532 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la prisión domiciliaria.



Por último se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

*“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»<sup>8</sup>, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».*

*... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).*

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

*“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”<sup>9</sup>*

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado **WILSON JAVIER RINCON COCA** reúne los requisitos estipulados en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000, motivo que lo lleva a acceder la petición invocada.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario “desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”.<sup>10</sup>

## 6.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo

<sup>8</sup> Ibídem.

<sup>9</sup> CSJ T 102248

<sup>10</sup> C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVÁ

de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.*

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

## 7.- DECISIÓN

En consecuencia, y sin necesidad de otras consideraciones, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA,**

**RESUELVE**



REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS  
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD  
FACATATIVA

**PRIMERO. RECONOCER** que hasta la presente fecha el interno **WILSON JAVIER RINCON COCA** identificado con C.C. 7.316.218 tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **34 MESES y 10.44 DÍAS**.

**SEGUNDO. CONCEDER** la sustitución de la prisión en establecimiento penitenciario por la prisión domiciliaria instituida en el artículo 38G del Código Penal, al sentenciado **WILSON JAVIER RINCON COCA** identificado con C.C. 7.316.218, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

**TERCERO. COMISIONAR** al Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, a fin de que se sirva notificar personalmente la presente decisión al interno **WILSON JAVIER RINCON COCA** quien se encuentra recluso en dicho penal.

**CUARTO.** Finalmente, se ordena por la Secretaría del Juzgado **PROCEDA** expedir la respectiva **BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA** a nombre del enjuiciado, previa constitución de la caución prendaria (2 SMLMV) mediante póliza judicial y el diligenciamiento del acta de compromiso enunciada en este proveído ante la Dirección del Penal, ordenando su traslado al lugar fijado como domicilio (prisión) en la **Calle 4 C No. 14B-48 Piso 1 barrio El Bosque en Cundinamarca. Celular 3229117144, a favor de WILSON JAVIER RINCON COCA.**

**QUINTO. DISPONER** que una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso prevista en el numeral 4º del artículo 38B del Código Penal y constituya la caución prendaria impuesta, el Director de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, proceda a lo pertinente respecto a la reseña del sentenciado ante el Establecimiento Carcelario competente y el traslado a la dirección **Calle 4 C No. 14B-48 Piso 1 barrio El Bosque en Cundinamarca. Celular 3229117144** bajo las medidas de seguridad que el caso amerite.

**SEXTO** Una vez ejecutoriado el presente auto, por la Secretaría del Juzgado **PROCEDASE** a ENCASILLAR las diligencias en el respectivo anaquel, para la vigilancia de la pena que le resta por descontar.

**SEPTIMO.** Envíese copia de esta decisión al director de la CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD – EJEC / CPAMS – EJECO / FACATATIVA CUNDINAMARCA, para que forme parte de la hoja de vida del condenado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de apelación.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**NELSON NOGUERA PINILLOS**  
JUEZ